

UN SUELDO POR NADA Los suizos votaron en junio la implantación de este salario universal. Tras un intenso debate, el 68% de los ciudadanos se manifestaron en contra

EN VEZ DE RENTA, CAPITAL BÁSICO

POR REINER EICHENBERGER Y ANNA MARIA KOUKAL

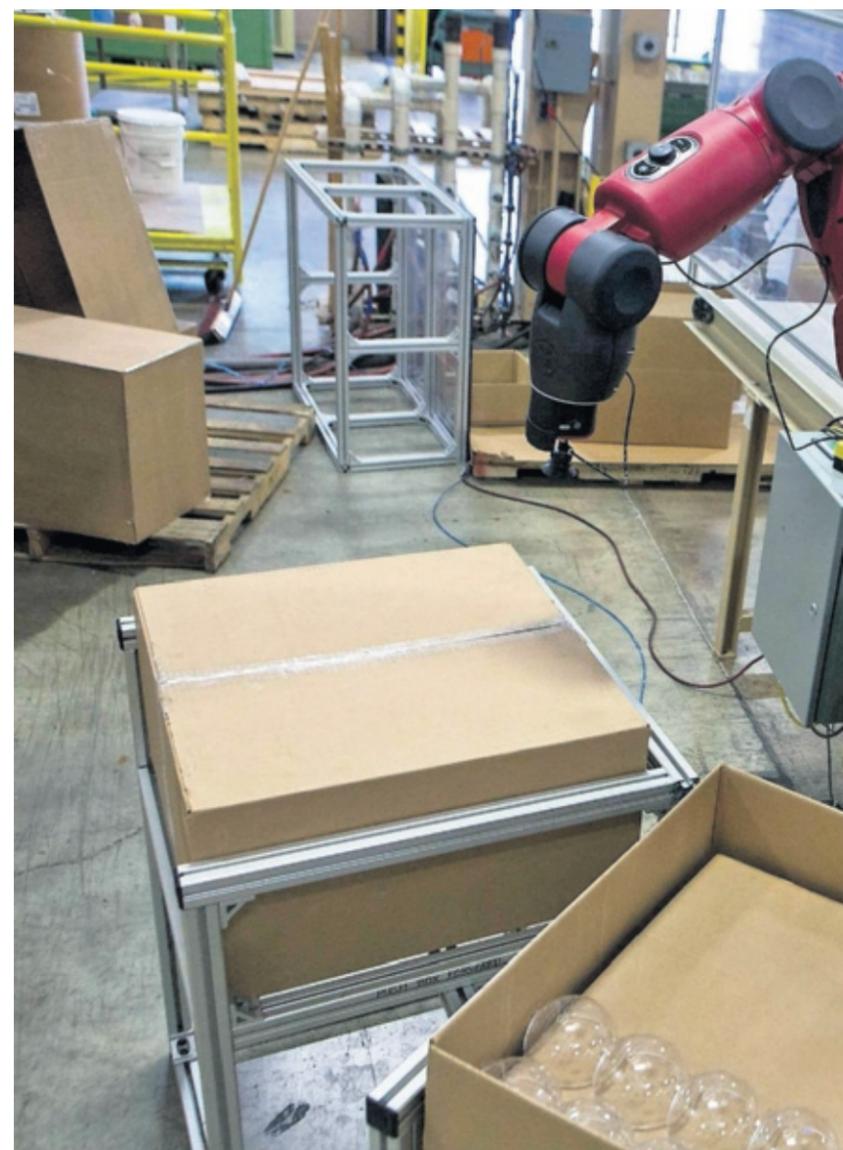
Frente a las trampas de las prestaciones sociales, urge un modelo eficiente. Un apoyo a los jóvenes en los años de formación es una alternativa a la renta básica

La renta básica universal es una idea fascinante. Para sus partidarios es una especie de teología de la liberación. Sostienen que libera a las personas tanto de la dependencia de las rentas derivadas del trabajo como de la misma obligación de trabajar. Les permite emplear el tiempo que quieran en lo que quieran, y no hacer algo porque no les queda más remedio. Además, al menos *a priori*, la renta básica acaba con la trampa de los subsidios sociales: en el sistema tradicional de seguridad social europeo los beneficiarios de las ayudas sociales tienen pocos incentivos para trabajar. En cuanto encuentran un empleo, pierden la ayuda y pasan a generar unos ingresos por los que habrán de pagar impuestos. No es de extrañar que a mucha gente le cueste dejar las ayudas sociales. Desde esta perspectiva, la renta básica universal sería efectivamente algo bueno si funcionase. Pero ¿funciona?

La crítica más frecuente es que, si la cobrase, mucha gente dejaría de trabajar. Se trata de un temor infundado. La renta básica no alcanza ni de lejos para

vivir como un rey. Por eso, los ingresos complementarios siguen siendo muy convenientes, y la motivación para trabajar, importante. Actualmente, una muestra de lo poco que influyen los ingresos “regalados” en la motivación para trabajar es que las personas que tienen rentas procedentes de su patrimonio comparables a la renta básica, o que son propietarias de una vivienda, y que, en consecuencia, tienen menos gastos por ese concepto, no trabajan menos que las personas sin patrimonio o sin vivienda.

El verdadero problema de la renta básica es otro: cuando es baja —por ejemplo, una décima parte de los ingresos medios—, ni da seguridad suficiente al receptor ni lo libra de la obligación de trabajar. Sin embargo, cuando es lo bastante alta, deja de ser financiable. Cuando no se financia mediante deuda y no es un simple ejercicio de redistribución desde los más ricos al resto de la población, para costearla, el ciudadano medio tiene que aportar más o menos la misma cantidad que recibe como renta básica. A primera vista esto no plantea ningún problema, ya que, aparentemente, para él no cambia nada. Sin embargo, las cosas no son así: al final, la renta básica se tiene que financiar a través de un impuesto sobre la renta o sobre el consumo. Para una renta básica equivalente más o menos al umbral de la pobreza, es decir, aproximadamente a la mitad de los ingresos medios actuales, se debería recaudar un impuesto complementario del 50% sobre cada euro ganado con el propio trabajo. A esto se añadirían los impuestos para las demás prestaciones públicas. Así, no se tardaría en llegar a tipos impositivos medios sobre las rentas del



trabajo del 80% o más. O sea, que a los defensores de la renta básica no les salen las cuentas.

De esto se podría deducir que los que ganan más deberían soportar una cuota más alta. Pero tampoco esto funciona. Cuantas menos personas lleven la carga, más alto tendrá que ser su gravamen. Sin embargo, como es sabido, los aumentos de impuestos

UNA IDEA QUE UNE A FRIEDMAN Y GALBRAITH

POR IGNACIO FARIZA

Fue concebida como una utopía pero ha acabado en programas electorales

La renta básica empezó en forma de utopía defendida, en tres siglos diferentes, por pensadores como Thomas Paine, Bertrand Russell o James Meade. Hoy, sin embargo, ha calado en ámbitos académicos, se asoma a algunos programas políticos de ideologías diversas —en algunos casos opuestas— y se perfila, si no como una realidad a corto plazo, sí como una opción posible en

un horizonte temporal más amplio. De idea de nicho, en muy pocos años ha pasado a ser ampliamente conocida por sectores crecientes de la población. Y, si la voluntad política acompaña, podríamos verla pronto como una realidad en países de nuestro entorno. Si es capaz de unir, aunque con motivaciones bien distintas, a economistas ideológicamente dispares como Milton Friedman y John Kenneth Galbraith, ¿qué podría frenarla?

Entre los intelectuales progresistas, tres razones empujan a la puesta en marcha de una asignación económica a cada ciudadano, por el mero hecho de serlo y sin distinción alguna, suficiente para cubrir sus necesidades básicas: la justicia social —“la riqueza de una sociedad es resultado del esfuerzo de las generaciones pasadas, no solo de la actual, y repartirla es una cuestión de justicia”, en palabras de Guy Standing, profesor de la Universidad de Londres—; la erradicación de la pobreza — John Kenneth Galbraith: “Un país rico como EE UU bien puede permitirse sacar a todos sus ciudadanos de la pobreza”— y la redistribu-

ción de las ganancias derivadas de la automatización —ya en 1995 Jeremy Rifkin se refería a la renta básica como la herramienta más efectiva para proteger a los trabajadores desplazados por las máquinas—.

En el ámbito puramente político, el exministro griego de Finanzas Yanis Varoufakis se ha referido recientemente a la renta básica como una aproximación “absolutamente esencial” para el futuro de la socialdemocracia; los laboristas británicos estudian “de cerca” la idea como antídoto contra la robotización y, en España, pese a haber pasado de proponer una renta básica universal a una renta garantizada con menos fondos, Podemos sigue incluyéndola en sus programas electorales con una cuantía de 600 euros por persona hasta un máximo de 1.290 euros por unidad familiar.

Como efectos colaterales positivos, sus defensores en la izquierda aseguran que presionaría al alza los salarios más bajos —ya que nadie se vería forzado a llevar a cabo los trabajos más duros y los empleados se verían obligados a aumentar su retribución— y contribuiría al desarrollo del voluntariado y del trabajo comunitario. Se trata, dicen sus más fervientes valedores, de una reformulación de un Estado de Bienestar 2.0 acechado por los efectos de la globalización; de una suerte de “vacuna contra los problemas sociales del siglo XXI”, en palabras de Scott Santens, uno de sus más férreos defensores. Todo, claro está, sin tocar los dos pilares básicos de la socialdemocracia: la educación y la sanidad pública, universal y de calidad.

Aunque tradicionalmente la renta básica ha sido

Uno de los robots especializados en el modelaje del plástico que trabajan para la factoría de juguetes K'nex. K. Tripplaar (Cordon Press)



por encima de entre el 60% y el 70% no generan más ingresos. Los incentivos negativos contra el trabajo asalariado y a favor de la evasión fiscal legal e ilegal son demasiado fuertes.

Muchos partidarios de la renta básica reclaman que se financie mediante el IVA. Pero estas cuentas tampoco cuadran, ya que, entonces, las tasas del im-

asociada a las ideologías progresistas y en los sectores conservadores ha gozado de mucho menos predicamento, dos de sus popes clásicos como Friederich Hayek o Milton Friedman no han dudado en respaldar la idea como parte de su ideal social. Hayek, nobel de Economía en 1974, se limitó a apoyar una suerte de "suelo del que nadie tenga que caer incluso cuando no es capaz de mantenerse a sí mismo" (*Derecho, legislación y libertad*, 1981). Friedman, en cambio, defendió la puesta en marcha de un impuesto negativo sobre la renta como un suelo "para todas aquellas personas en situación de necesidad, sin importar las razones, que dañe lo menos posible su independencia".

Se trataría de unificar el sistema de ayudas sociales, simplificar la burocracia y eliminar ineficiencias

Más recientemente, intelectuales conservadores de cabecera en EE UU como Charles Murray han defendido el concepto como una alternativa a un Estado de Bienestar que detestan y que, a su juicio, está en pleno proceso de "autodestrucción". Murray propone una asignación anual de 10.000 dólares (algo menos de 9.000 euros) al año a cada adulto mayor de 25 años

que sustituya a todas las transferencias sociales y al programa de atención médica Medicare. "Bajo los criterios conservadores", escribía recientemente el politólogo del *think tank* American Enterprise Institute, esta renta básica "es claramente superior al sistema actual para terminar con la pobreza involuntaria". Se trata, argumentan, de unificar el complejo sistema de ayudas sociales vigente en muchos países, simplificar la burocracia, eliminar ineficiencias y reestablecer la libertad individual.

Las reticencias en ambos lados del espectro ideológico también son notables, especialmente en el caso conservador. Si en la izquierda el sector crítico considera que la renta básica laminaría el poder de negociación de los sindicatos y daría alas a quienes piden mayor flexibilidad del mercado de trabajo, sus pares en la derecha elevan el tono por la inflación que generaría, la imposibilidad de ponerla en marcha con el esquema fiscal actual y, sobre todo, por su efecto desincentivador del trabajo.

Sin embargo, la idea sigue abriéndose camino. Suiza la sometió en junio a referéndum (perdió, eso sí, por amplia mayoría); la cuarta ciudad más poblada de Países Bajos, Utrecht, probará desde enero una asignación 960 euros al mes durante dos años a 250 de sus ciudadanos para analizar los pros y los contras de la medida; en Finlandia, la coalición de Gobierno de centroderecha en la que están los populistas ultracconservadores de Verdaderos Finlandeses, también pondrá en marcha un proyecto piloto en 2017 de entre 500 y 700 euros mensuales para entre 5.000 y 10.000

puestos se disparan. Para tener suficiente financiación el IVA fácilmente tendría que llegar a un 50% o más solo para ese fin, así que la idea está muerta.

Por eso, algunos defensores de la renta básica universal sostienen que no tendrían que percibirla todos los ciudadanos y, al mismo tiempo, cobrarles un impuesto complementario, sino que la renta se debería ajustar a los ingresos procedentes del trabajo. Es decir, quien disponga de ellos no debería percibirla, o bien tener una renta reducida. Pero esto no es más que una falacia, ya que, al final, el ajuste viene a ser un gravamen, camuflado pero muy elevado, sobre los ingresos obtenidos por el propio trabajo. Además, la idea se devora a sí misma: la renta básica deja de ser incondicional porque solo reciben el dinero quienes ganan menos de lo que cobran por la renta, así que en este supuesto la idea está más que muerta.

Si la renta básica es incondicional, surge otro problema: ¿qué se debe hacer con los recién llegados, o con los que emigran al país precisamente debido a la renta básica? La única manera de responder es introducir condiciones. De este modo, lo que era una renta básica incondicional se convierte en discriminatoria.

A veces se alega que en países en desarrollo, e incluso en países de la UE, se han hecho experimentos con buenos resultados. No es verdad. Los experimentos solo ponen de relieve si los participantes quieren cobrar la renta básica y en qué medida siguen trabajando. El resultado es que los que colaboran están contentos de recibir el dinero, y que, en la mayoría de los casos, siguen trabajando como es debido. No resulta muy sorprendente. Sin embargo, se pasa por alto la cuestión fundamental: los participantes no tienen que asumir los costes de la renta básica, sino que los directores del experimento les pagan. Pero una renta básica realista la tienen que costear sus propios beneficiarios. Así pues, un experimento significativo no debería indagar si la gente quiere dinero gratis, sino si quiere financiarlo ella misma. Tras un intenso debate, cerca de un 68% de los suizos votó en contra de implementar este modelo en el referéndum de junio.

En definitiva, la renta básica no funciona. A pesar de ello, hay que encontrar medios contra la trampa de la ayuda social que sean eficaces, pero también financieramente viables. Podemos aprender mirando a las familias y la relación que los progenitores establecen con su descendencia. Prácticamente a nadie se le ocurre la descabellada idea de pagarles a sus hijos una renta vitalicia. En cambio, muchos padres les dan un capital inicial del que sus hijos pueden vivir si llegan malos tiempos, o con el que pueden pagar sus estudios.

Esta fórmula se podría trasladar al Estado. Todos los jóvenes de 20 años, independientemente del tiempo que lleven en el país, deberían recibir del Estado un capital básico equivalente, por ejemplo, a dos veces el salario medio anual, que tendrían derecho a utilizar de acuerdo con una normativa estatal. Así, si fuese necesario, se podría cobrar durante cuatro años una renta básica equivalente a la mitad del salario medio para poder financiar así los estudios universitarios u otra clase de formación profesional, o independizarse. De este modo se generarían incentivos perfectos para quienes hasta entonces hubiesen recibido ayudas sociales, porque entonces podrían quedarse con todos los ingresos procedentes de su trabajo. Además, se podrían aumentar las tasas universitarias y fomentar la competencia entre universidades, puesto que la ciudadanía dispondría de dinero para dedicar realmente a los estudios. La inmigración tampoco pondría en peligro el capital básico, ya que la cuantía percibida se podría adecuar al tiempo que hubiese vivido en el país en cuestión durante la infancia. De este modo,

Un experimento significativo no debería indagar si la gente quiere dinero gratis, sino si quiere financiarlo ella misma

el capital básico podría solventar en gran medida la trampa de los subsidios y otros problemas sociales. Al mismo tiempo, la educación daría como resultado una redistribución de los medios más justa, más eficaz, y todo esto proporcionaría más igualdad de oportunidades. Además, el capital básico solo supondría una quinta parte de los costes de la renta básica: un ciudadano no recibiría entre 60 y 80 pagos anuales, como ocurre con la renta básica, sino solo 4. Así, el capital básico se podría financiar sin problemas y liberaría verdaderamente a las personas.

Reiner Eichenberger es profesor de Teoría Económica y de Finanzas de la Universidad de Friburgo y director de investigación de CREMA (Center for Research in Economics, Management and the Arts). Anna Maria Koukal es colaboradora científica de la cátedra de Ciencias Financieras de la Universidad de Friburgo.

Traducción de News Clips.

mayores de edad. Quizá el caso más llamativo es el de la aceleradora de *start-ups* Y Combinator, que ensaya un pago de entre 1.000 y 2.000 dólares mensuales a 100 familias de Oakland (California): la principal cuna de emprendedores del planeta, de la que parte la llamada cuarta revolución industrial, empieza a vislumbrar en la renta básica la panacea para un mundo cada vez más rico y eficiente, pero también desigual.

Esas dos ideas, una economía cada vez más digitalizada y desarrollada y una inequidad galopante, empujan a la renta básica. Nunca antes en la historia de la humanidad ha habido un momento mejor para nacer que el actual: según los cálculos más conservadores, el bienestar material global se ha triplicado en los últimos 65 años, tal y como destacaba recientemente en un artículo de Bradford DeLong publicado por este diario. La irrupción de Internet ha abierto un abanico inédito de posibilidades. Pero la automatización y robotización que ha contribuido a abaratar un sinfín de procesos productivos también ha traído consigo crecientes bolsas de paro.

La predicción, hace casi un siglo, de John Maynard Keynes en su ensayo *Posibilidades económicas para nuestros nietos* (1930) es hoy más real que nunca: "Estamos siendo afligidos por una nueva enfermedad (...): el desempleo tecnológico (...)". Contra esta realidad y a la luz de los últimos estudios que calculan que entre el 35% y el 50% de los puestos de trabajo están en riesgo de automatización, la renta básica merece, al menos, un estudio concienzudo de sus muchas ventajas y algunos inconvenientes.